

EXPEDIENTE: TJA/5ªSERA/183/2025

PARTE ACTORA: [REDACTED]
[REDACTED]

AUTORIDAD DEMANDADA:
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
MORELOS Y OTRA.

MAGISTRADO: JOAQUÍN ROQUE
GONZÁLEZ CEREZO.

SECRETARIA DE INSTRUCCIÓN:
FERNANDA MARYLE ALONSO
MARTÍNEZ.

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA:
ANA MARÍA ROMERO CAJIGAL.

Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de mayo del dos mil
veintiséis.

1. RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN

SENTENCIA que emite el Pleno del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente número
TJA/5ªSERA/183/2025, promovido por [REDACTED]
[REDACTED], en contra de la **Secretaría de Hacienda del Poder**

Ejecutivo del Estado de Morelos y otra; en la que se determina que son **infundadas** por un lado y **fundadas** por otro las razones de impugnación hechas valer por el actor, en consecuencia, se declara parcialmente **existente el acto impugnado**; por ende, se determina ilegal y su nulidad solamente respecto a los pagos pensionatorios del año dos mil veinticinco y se **condena** a las autoridades demandadas al pago de las diferencias de pensiones de enero a agosto de dos mil veinticinco; asimismo, en ejecución las demandadas de sentencia deberán demostrar los pagos o cubrir las diferencias de los meses de septiembre a diciembre de dos mil veinticinco; aguinaldo del año dos mil veinticinco; a cubrir las pensiones del año del dos mil veintiséis en términos del presente fallo; así como a seguir cubriendo el resto de sus pensiones y aguinaldos con la dinámica descrita en esta sentencia; con base en los siguientes capítulos:

2. GLOSARIO

Parte actora:

[REDACTED]

**Autoridades
demandadas:**

1. Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; y

Directora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del

Estado de Morelos¹.

Acto Impugnado:

"... La omisión de no pagarme mi pensión por Cesantía de edad Avanzada a razón de 40 días de salario mínimo vigente, tal como los establece el ARTÍCULO SEGUNDO del [REDACTED]

(Sic)

LJUSTICIAADMVAEMO: *Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.*

LORGTJAEMO: *Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.*

CPROCIVILEM: *Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Morelos.*

LSSPEM: *Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos.*

LSEGSOCSPEN: *Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de*

¹ Nombre correcto y completo de la autoridad demandada, según la contestación de demanda que obra visible de la foja 32 a la 42 del proceso.

*Procuración de Justicia del
Sistema Estatal de Seguridad
Pública.*

LSERCIVILEM: *Ley del Servicio Civil del Estado
de Morelos.*

Tribunal: Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de
Morelos.

3. ANTECEDENTES DEL CASO

1.- Mediante acuerdo de fecha **trece de agosto de dos mil veinticinco**², se admitió a trámite la demanda incoada por [REDACTED] en contra de las **autoridades demandadas**, en la que se señaló como **acto impugnado**, el especificado en el glosario de la presente resolución.

En consecuencia, se formó el expediente respectivo y se registró en el Libro de Gobierno correspondiente, con las copias simples, se ordenó emplazar a las **autoridades demandadas** para que dentro del término de diez días produjeran contestación a la demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento de ley respectivo.

2.- Emplazadas que fue las **autoridades demandadas**, por auto de fecha **diecinueve de septiembre de dos mil**

² Fojas 15.

veinticinco³, se les tuvo dando contestación en tiempo y forma a la demanda, por opuestas sus defensas y excepciones y anunciadas las pruebas que a su parte corresponden; ordenándose dar vista a la **parte actora** por el plazo de tres días, haciéndole del conocimiento su derecho para ampliar la demanda.

3.- Por acuerdo de fecha **dieciocho de octubre de dos mil veinticinco**⁴, se tuvo al accionante desahogando la vista citada en el párrafo que precede.

4. Por acuerdo de fecha **veintinueve de octubre de dos mil veinticinco**⁵, se tuvo por precluido el derecho del justiciable para realizar su ampliación de demanda, en términos del artículo 41 de la **LJUSTICIAADMVAEMO**, ordenándose abrir el periodo probatorio para ambas partes.

5.- Previa certificación, en el auto de fecha **dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco**⁶, se hizo constar que ninguna de las partes ofreció ni ratificó las pruebas que a su parte correspondieron; por tanto, se les tuvo por perdido su derecho para tal efecto; no obstante lo anterior, con sustento en el artículo 53 de la **LJUSTICIAADMVAEMO**; la Sala del conocimiento procedió a pronunciarse sobre las diversas pruebas que constan en autos y que se estimaron pertinentes

³ Fojas 74.

⁴ Foja 105.

⁵ Foja 110

⁶ Fojas 115

para la mejor decisión del presente juicio, cuya relación y valoración se hará en el apartado correspondiente.

6.- El trece de enero de dos mil veintiséis se celebró la audiencia de ley⁷, en la que se hizo constar que ninguna de las partes compareció; en consecuencia, se procedió al desahogo de las pruebas admitidas; se cerró el periodo probatorio, se continuó con la etapa de alegatos sin que ninguna de las partes los formulara, teniendo en consecuencia por precluido su derecho; se ordenó cerrar la instrucción del presente juicio, quedando en estado de resolución; misma que se dicta a tenor de los siguientes capítulos:

4. COMPETENCIA

Este Tribunal de Justicia Administrativa en Pleno es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 116 fracción V de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, 109 bis de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos*, 1, 3 de la **LJUSTICIAADMVAEMO**; 1, 3, IX, 4 fracción III, 16 y 18, apartado B), fracción II, incisos a), h), n) y demás relativos y aplicables de la **LORGTJAEMO**; así como el diverso 105 de la **LSSPEM**.

5. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

⁷ Fojas 127

Como se estableció, la **parte actora** señaló como acto impugnado el siguiente:

"... La omisión de no pagarme mi pensión por Cesantía de edad Avanzada a razón de 40 días de salario mínimo vigente, tal como los establece el ARTÍCULO SEGUNDO del

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (Sic)

Ahora bien, por tratarse el **acto impugnado** de una omisión, por su naturaleza su existencia, legalidad o ilegalidad, será materia del estudio que se realice en el fondo de la presente sentencia.

6. PROCEDENCIA

Las causales de improcedencia del juicio de nulidad, por ser de orden público, deben analizarse preferentemente las aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 párrafo último de la **LJUSTICIAADMVAEMO**, en relación con lo sostenido en la siguiente tesis de jurisprudencia de aplicación análoga y de observancia obligatoria para esta potestad en términos de lo dispuesto en los artículos 215 y 217 de la *Ley de Amparo*.

IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.⁸

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el

⁸ Tipo de documento: **Jurisprudencia**, Novena época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Enero de 1999, Página: 13.

Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito.

Es menester señalar que, si bien los artículos 17 Constitucional, 8 numeral 1 y 25 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el derecho a ésta última y contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de nulidad sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él decretado, por sí viola esos derechos.

Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y, decidir sobre la cuestión debatida.

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

De ahí que las causales de improcedencia establecidas en la **LJUSTICIAADVMAEMO**, tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulen, reconoce la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo; pues la obligación de garantizar ese recurso efectivo, no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo.

En ese sentido, se tiene que las **autoridades demandadas**, al dar contestación a la demanda incoada en su contra, invocaron la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 37, en relación con el artículo 38 fracción II, ambos de la **LJUSTICIAADVMAEMO**, mismos que a la letra disponen:

Artículo 37. El juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa es improcedente en contra de:

...

X. Actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio dentro del término que al efecto señala esta Ley;

...

Artículo 38. Procede el sobreseimiento del juicio:

...

II. Cuando durante la tramitación del procedimiento sobreviniera o apareciese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere esta Ley;

...

Lo anterior pues a su consideración, la demanda incoada no se encuentra presentada dentro del plazo al que hace referencia la fracción I del artículo 40 de la **LJUSTICIAADVMAEMO**, numeral que es del tenor siguiente:

Artículo 40. La demanda deberá presentarse:

I. Dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que le haya sido notificado al afectado el acto o resolución impugnados, o haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o se haya ostentado sabedor de los mismos cuando no exista notificación legalmente hecha.

Ello, dicen, por el actor recibió su primer pago como pensionado el veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, por lo que afirman, el derecho del accionante a efectuar el reclamo que pretende ha transcurrido en demasía, al haber presentado su demanda hasta el **seis de agosto de dos mil veinticinco**, cuando el plazo de quince días venció **el veintitrés de abril de dos mil veinticuatro**.

Se estima que la causal de improcedencia invocada resulta **inatendible**, ello toda vez que, como ha quedado precisado en líneas que anteceden, la parte actora reclama de **las autoridades demandadas**:

“... La omisión de no pagarme mi pensión por Cesantía de edad Avanzada a razón de 40 días de salario mínimo vigente, tal como los establece el ARTÍCULO SEGUNDO del

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (Sic)

En ese sentido, al consistir el **acto impugnado** en una omisión, la misma se da de momento a momento, por ser de tracto sucesivo; por ende, no prescribe el derecho a formular

su reclamo, afirmación que encuentra sustento en la tesis de texto y rubro siguientes:

RECURSO DE QUEJA EN AMPARO DIRECTO CONTRA LA ABSTENCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE PROVEER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO LEGAL. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UNA OMISIÓN DE TRACTO SUCESIVO.

El artículo 98 de la Ley de Amparo no establece expresamente el plazo para la interposición del recurso de queja en amparo directo cuando se reclama que la autoridad responsable se abstuvo de proveer sobre la suspensión del acto reclamado dentro del plazo legal, pues únicamente prevé en su fracción I, que el término para la interposición del medio de impugnación referido es de dos días hábiles, cuando se trate de la suspensión de plano o provisional. Luego, dicha porción normativa resulta aplicable únicamente para aquellos casos en que la responsable se pronuncie sobre la medida cautelar solicitada, esto es, cuando se conceda o niegue la suspensión; entonces, es en dicho supuesto en el que las partes, en caso de estar inconformes con la determinación, tendrán dos días hábiles para impugnarlo. En tales condiciones, se colige que el plazo de dos días que establece el artículo en examen, es inaplicable cuando se reclame la omisión de proveer sobre la suspensión dentro del plazo legal, pues se trata de una abstención de la autoridad responsable, y esa omisión es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por ser hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la omisión de que se trata. De ahí que, cuando se esté frente a esta hipótesis, el plazo para interponer el recurso de queja debe ubicarse, por similitud legal, en la fracción II del dispositivo citado, para ser interpuesto en cualquier tiempo; máxime que, de tomar como parámetro un plazo en específico, no habría punto de partida para iniciar su cómputo.⁹

Es por la anterior que, esta autoridad estima **infundada** que haya consentido el acto que hizo valer la responsable, tomando en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el derecho para reclamar la pensión o su correcta fijación es imprescriptible, por tratarse de actos de tracto sucesivo que se producen día a día; en

⁹ Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 2016880, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Décima Época; Materias(s): Común; Tesis: XVII.2o.3 K (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, página 2759; Tipo: Aislada.

consecuencia, también es imprescriptible el derecho para reclamar los incrementos y las diferencias que resulten de éstos; prescribiendo, en su caso, únicamente las acciones para demandar el pago de los aumentos reclamados o pagos de pensiones de los meses anteriores que ya estén vencidos, en este caso, en el término de un año, lo que tiene apoyo en el artículo 104 de la **LSERCIVILEM**, precepto legal aplicable en términos del artículo decimo primero¹⁰ transitorio de la **LSEGSOCSPEN** y que establece lo siguiente:

Artículo 104.- Las acciones de trabajo que surjan de esta Ley **prescribirán en un año**, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes.

La jurisprudencia a que nos referimos es la siguiente:

PENSIÓN JUBILATORIA. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ÉSTOS RESULTEN ES IMPRESCRIPTIBLE. ¹¹

¹⁰ **DÉCIMO PRIMERO.** Para todo lo no contemplado en la presente Ley en materia de pensiones, se estará en la observación supletoria de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

¹¹ **SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.**

Suprema Corte de Justicia de la Nación; Registro digital: 2021299, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Laboral, Tesis: I.6o.T. J/50 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo II, página 930; Tipo: Jurisprudencia.

Amparo directo 112/2012. José Cesáreo Hernández Pedrosa y/o Pedroza. 29 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Claudia Gabriela Soto Calleja.

Amparo directo 1309/2012. Víctor Apolonio Rosales Ortega. 22 de noviembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Elia Adriana Bazán Castañeda.

Amparo directo 190/2014. Mario Flores Guinto. 22 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Sandra Iliana Reyes Carmona.

Amparo directo 1639/2014. Petróleos Mexicanos y otras. 30 de abril de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretaria: Dalia Miroslava Huitrón González.

Amparo directo 9/2019. 28 de febrero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: María del Rocío P. Posada Arévalo.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2019 a las 10:25 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del jueves 02 de enero de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019.

Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **el derecho para reclamar la pensión jubilatoria o su correcta fijación es imprescriptible, por tratarse de actos de tracto sucesivo que se producen día a día; en consecuencia, también es imprescriptible el derecho para reclamar los incrementos y las diferencias que resulten de éstos, prescribiendo, en su caso, únicamente las acciones para demandar el pago de los aumentos reclamados en las pensiones de jubilación de los meses anteriores en más de un año a la fecha de presentación de la demanda**, en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, que señala el plazo genérico de prescripción.

(Lo resaltado es añadido)

7. ESTUDIO DE FONDO

7.1 Planteamiento del caso

En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 86 de la **LJUSTICIAADVMAEMO**¹², se procede a hacer la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos en el presente juicio.

Así, tenemos que la **parte actora** señaló como acto reclamado en su demanda, el reseñado en el glosario de la presente sentencia; el cual se tiene íntegramente reproducido como si a la letra se insertasen, en obvio de repeticiones innecesarias, de los cuales está en controversia su ilegalidad o legalidad. Así como la procedencia o improcedencia de sus pretensiones, las cuales se encuentran íntimamente ligadas con el acto impugnado.

¹² Artículo 86. Las sentencias que dicte el Tribunal no necesitarán formulismo alguno; pero deberán ser redactadas en términos claros y precisos y contener:
I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos;

Por lo anterior, se precisa que el análisis de la legalidad o ilegalidad del **acto impugnado** se efectuará bajo la óptica de las razones de impugnación que hizo valer la demandante, atendiendo la causa de pedir y la suplencia de la queja en términos del criterio que a continuación se transcribe:

EN FAVOR DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, CONFORME AL MARCO DE DERECHOS HUMANOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y AL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.¹³

El artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que las normas relativas a derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Norma Fundamental y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que se favorezca ampliamente a las personas. En ese sentido, el legislador reformó el juicio de amparo con la intención de convertirlo en un mecanismo más eficaz para evitar o corregir los abusos del poder público que lesionan o vulneran los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal, para beneficiar notoriamente a determinados sectores de la población que pudieran estar en situación de desventaja o vulnerabilidad social. De ahí que el artículo 79, fracción VII, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que autoriza la suplencia de la queja deficiente en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio, opere respecto de jubilados y pensionados, derivado de la evidente desventaja económica y física que tienen para defenderse, por lo que no es dable otorgarles condiciones de igualdad dentro de un procedimiento judicial, pues sería injusto darles el mismo trato que a quienes poseen recursos económicos suficientes para defenderse por sí mismos, ya que por la carencia de éstos o la imposibilidad física para trasladarse no pueden autodefenderse o pagar una defensa adecuada, tomando en consideración que las cantidades que reciben por concepto de jubilación o pensión, en muchas ocasiones no corresponden al salario que percibían cuando laboraban.

7.2 Carga Probatoria

Como se desprende del **acto impugnado**, se reclama de la **autoridad demandada**, la omisión relacionada con el pago

¹³ Registro digital: 2008449 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materia(s): Común, Administrativa Tesis: I.3o.A. J/1 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2394 Tipo: Jurisprudencia.

correcto de la pensión concedida al actor; en tal orden, el estudio de la presente contendia consistirá, en resolver si dicha pensión se ha cubierto debidamente; siendo que, la carga de la prueba de haber dado cumplimiento a dicho Decreto les corresponde a las autoridades demandadas.

Esto es así, ya que la carga probatoria tiene una relación directa con la naturaleza del acto imputado; así tenemos que para que se configure una omisión es imprescindible que exista un deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación.

De igual manera, la omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. Sirve de orientación a la anterior afirmación, la siguiente tesis aislada de texto y rubro siguientes:

INTERPRETACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PARA DETERMINAR SI EXISTE OBLIGACIÓN DE REALIZARLA DEBE DISTINGUIRSE SI SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS U OMISIVOS.

Cuando se alega que el Tribunal Colegiado del conocimiento no realizó la interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal en un juicio de amparo directo, debe distinguirse si se trata de actos negativos u omisivos. La diferencia entre ellos radica en que los estados de inacción no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de un deber, mientras que las omisiones sí. Esto es, las cosas que simplemente no hacemos no tienen repercusiones en términos normativos; en cambio, otras cosas que no hacemos, pero que teníamos el deber de hacer, constituyen omisiones. De este modo, se concluye que el hecho de que un Tribunal Colegiado no haya llevado a cabo la interpretación a que alude el quejoso en sus agravios, no implica que haya incurrido en el incumplimiento de algún deber, pues para que exista la obligación de realizar dicha

interpretación -en el sentido de establecer los alcances de una norma constitucional-, se requiere que: 1) el quejoso lo hubiese solicitado; 2) quede demostrado que algún precepto constitucional (o parte de él) es impreciso, vago o genera dudas; y 3) dicho precepto se hubiera aplicado al quejoso sin haber despejado racionalmente esas dudas, en menoscabo de sus garantías.

En ese sentido, debe considerarse que, para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que solo pueden omitirse conductas fácticas y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho, no acata la facultad normativa, siendo aplicable a lo anterior, la siguiente tesis aislada:

ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO.

Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa

conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos.¹⁴

Sentado lo anterior, de una lectura al escrito inicial de demanda, así como las diversas constancias que la acompañaron, se advierte que la omisión que se reclama a las **autoridades demandadas**, implica un no hacer o abstención, en detrimento de los derechos de la **parte actora**; en ese sentido, la comprobación la omisión queda sujeta a la exhibición de las constancias del hecho positivo que la desvirtúen, en ese tenor, le corresponde a la parte demandada la carga probatoria de acreditar la inexistencia de la omisión reclamada, lo anterior encuentra sustento en la tesis de texto y rubro que a continuación se citan:

ACTOS RECLAMADOS DE NATURALEZA OMISIVA. SU ACREDITAMIENTO QUEDA SUJETO A QUE NO SE ALLEGUE AL JUICIO DE GARANTÍAS EL MEDIO PROBATORIO POR EL QUE SE ACREDITE EL HECHO POSITIVO QUE DESVIRTÚE LA OMISIÓN.

En los actos reclamados de naturaleza positiva, esto es, los que implican un hacer de la autoridad, la carga de la prueba respecto de su existencia cierta y actual recae en la parte quejosa, ya que es ella quien afirma el perjuicio que le irrojan los mismos. En cambio, cuando los actos reclamados son de naturaleza omisiva, esto es, implican un no hacer o abstención de las autoridades responsables, en perjuicio de los derechos fundamentales de la parte quejosa, su acreditamiento queda sujeto a que no obre en autos algún medio probatorio del que se advierta el hecho positivo que la desvirtúe, esto es, la carga de la prueba se revierte a las contrapartes del quejoso, a efecto de que

¹⁴ Registro digital: 196080 Instancia: Primera Sala Novena Época Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 1a. XXIV/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, página 53 Tipo: Aislada.

demuestren que las autoridades responsables no incurrieron en las omisiones que se les atribuyen.¹⁵

Lo anterior, siempre y cuando se establezca una obligación a cargo de las **autoridades demandadas** de proceder en los términos que requiere el accionante.

7.3 Pruebas

Ninguna de las partes ofreció ni ratificó las pruebas que a su parte correspondía; por ende, se les tuvo por perdido su derecho para tal efecto; no obstante, se admitieron las siguientes pruebas, mismas que fueron relacionadas y desahogadas en la audiencia de ley:

1. **LA DOCUMENTAL.** – Consistente en copia simple de la portada y las páginas 43, 44 y 45 del periódico oficial “Tierra y Libertad”, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].¹⁶

2. **LA DOCUMENTAL.** – Consistente en la impresión del Comprobante para el Empleado correspondiente al periodo comprendido de **primero al treinta y uno de julio de dos mil veinticinco** a nombre de [REDACTED] [REDACTED] en su calidad de pensionado que ampara la cantidad total de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].¹⁷

¹⁵ Registro digital: 162441 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Común Tesis: I.3o.C.110 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Abril de 2011, página 1195 Tipo: Aislada.

¹⁶ Fojas 8 y 9 del presente asunto.

¹⁷ Fojas 10

5. LA DOCUMENTAL. – Consistente en la impresión del Comprobante para el Empleado correspondiente al periodo comprendido de **primero al treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro**, a nombre de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], en su calidad de pensionado que ampara la cantidad total de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

²⁰ Fojas 13

6. LA DOCUMENTAL. – Consistente en la impresión del Comprobante para el Empleado correspondiente al periodo comprendido de primero al treinta de abril de dos mil veinticuatro a nombre de [REDACTED] [REDACTED] en su calidad de pensionado que ampara la cantidad total de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

7. LA DOCUMENTAL. – Consistente en copias certificadas constante de dos fojas según su certificación del Alta y Calculo de Pensionado de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], de fecha nueve de febrero de dos mil veinticuatro.²²

8. LA DOCUMENTAL. – Consistente en Constancia Salarial a nombre de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], suscrito y firmado por la Directora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración.

9. LA DOCUMENTAL. – Consistente en Constancia de Servicios a nombre de [REDACTED], suscrito y firmado por la Directora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, donde se indica como fecha de baja el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y como alta como pensionado el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].²³

²¹ Fojas 14

²² Fojas 44 y 45

²³ Fojas 48

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

10. LA DOCUMENTAL. – Consistente en Constancia Salarial Nominal Mensual a nombre de [REDACTED], suscrito y firmado por la Directora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, como activo en la calidad de [REDACTED] donde se establece que su percepción asciende a [REDACTED] mensuales.²⁴

11. LA DOCUMENTAL. – Consistente en copias certificadas constantes de veintiún fojas según su certificación, que corresponden a la información obtenida del sistema de nómina a nombre de [REDACTED] de donde se desprenden los comprobantes de pagos pensionatorio.²⁵

A) De marzo a diciembre de dos mil veinticuatro, amparando cada uno de ellos la cantidad de [REDACTED]

B) Pago de aguinaldo del año dos mil veinticuatro como pensionado por un total de [REDACTED]

²⁴ Fojas 47

²⁵ Fojas de la 51 a la 71.

C) De enero a agosto de dos mil veinticinco, amparando cada uno de ellos la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

Respecto a la probanza identificada con el numeral 1, es dable otorgarle valor probatorio pleno, toda vez que, al ser fuente de derecho, constituye un hecho notorio para este **Tribunal**, sirviendo de orientación a la anterior afirmación la tesis aislada de rubro:

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. SU PUBLICACIÓN Y CONTENIDO ES HECHO NOTORIO, BASTA SU COPIA SIMPLE PARA OBLIGAR A CONSTATAR SU EXISTENCIA Y TOMARLA EN CUENTA.²⁶

Los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales son claros al establecer que el Diario Oficial de la Federación es el órgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público, que tiene como función publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente; asimismo, establecen cuáles actos son materia de publicación, a saber, las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión; los decretos, reglamentos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo Federal que sean de interés general; los acuerdos, circulares y órdenes de las dependencias del Ejecutivo Federal, que sean de interés general; los tratados celebrados por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos; los acuerdos de interés general emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los actos y resoluciones que la Constitución y las leyes ordenen que se publiquen en el Periódico Oficial; y aquellos actos o resoluciones que por propia importancia así lo determine el Presidente de la República. Luego, la circunstancia de que una parte dentro de un juicio aporte en copia simple un ejemplar del Diario Oficial de la Federación, por el que pretende acreditar una especial situación jurídica que le afecta, no puede considerarse en modo alguno como un documento que tiene valor indiciario del hecho que se pretende demostrar, porque ha

²⁶ Registro digital: 2003033 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materia(s): Civil, Común Tesis: I.3o.C.26 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, página 1996 Tipo: Aislada TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 302/2012. Novamedic Seguros de Salud, S.A. de C.V. 14 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas.

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

quedado establecido que la naturaleza del Diario Oficial es la de ser un órgano de difusión de los actos que la propia ley señala, **y en razón de su finalidad de dar publicidad a los mismos, es que ninguna autoridad puede desconocer su contenido y alcance; en tal virtud, es de colegirse que el acto de publicación en ese órgano de difusión consta de manera documental, por lo que su presentación en una copia simple ante la autoridad judicial, no puede justificar un desconocimiento del acto por aquélla, sino que tiene el deber de tomar en cuenta esa publicidad del acto patente en el documento presentado en copia simple que refleja la existencia del original del Diario Oficial de la Federación que es fácilmente constatable como hecho notorio**, más aún cuando existe la presunción legal de conocerlo por parte de la autoridad judicial, porque atento a lo establecido por el artículo 8o. de la citada ley, el Diario Oficial debe ser distribuido gratuitamente a los tres Poderes de la Unión y debe proporcionarse a los gobernadores de los Estados - incluido el Distrito Federal- una cantidad suficiente de ejemplares. Basta que la autoridad judicial tenga conocimiento del acto jurídico que invoca la parte interesada como publicado en el Diario Oficial de la Federación, que derivan del hecho material de haber sido difundido en una fecha precisa y su contenido, para que la autoridad judicial esté en condiciones de pronunciarse sobre ese aspecto, **porque se trata de un acontecimiento notorio que deriva de fuentes de información que la ley garantiza le deben ser proporcionadas por otros órganos del Estado.**

(Lo resaltado no es origen)

Respecto a los elementos de convicción identificados con los numerales **2, 3, 4, 5. 6 y 11**, se les atribuye valor probatorio pleno, al no haber sido objetados en términos de lo dispuesto por los artículos 59²⁷ y 60²⁸ de la **LJUSTICIAADMVAMO**.

²⁷ **Artículo 59.** Las partes podrán impugnar la validez o autenticidad de los documentos ofrecidos como prueba, en la propia contestación de la demanda, cuando hubiesen sido exhibidos con el escrito inicial, o dentro del término de tres días contados a partir de la fecha en el que el documento de que se trate se agregue a los autos.

²⁸ **Artículo 60.** Cuando se impugne la validez o autenticidad de un documento, la impugnación se tramitará en la vía incidental observándose en su caso lo siguiente:
I. Para tener por impugnado un documento, no bastará decir que se impugna, sino que se deberá, fundamentar las causas de impugnación;
II. En el mismo escrito en que se haga la impugnación deberán ofrecerse las pruebas relacionadas con la misma;
III. Del escrito de impugnación, se dará vista al oferente del documento impugnado, para que dentro del término de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho corresponda;

Relativo a las pruebas admitidas contenidas en los numerales **7, 8, 9 y 10** se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 437 primer párrafo²⁹ del **CPROCIVILEM**, de aplicación supletoria a la **LJUSTICIAADMVAMO** con base en su artículo 7³⁰, por tratarse de copias certificadas y originales, respectivamente emitidas por autoridad facultada para tal efecto.

7.4 De las razones de impugnación.

Las razones de impugnación hechas valer por la **parte actora**, se encuentran visibles en su escrito inicial de demanda³¹, mismas que se tienen aquí como íntegramente reproducidas

al desahogar esta vista, el oferente deberá ofrecer a su vez, las pruebas que se relacionen con la impugnación;

IV. Cuando el oferente del documento impugnado no desahogare la vista o no ofreciera pruebas relacionadas con la impugnación se tendrán por ciertas las afirmaciones del impugnante y el documento de que se trate no surtirá efecto probatorio alguno;

V. Desahogada la vista a que se refiere la fracción III de este Artículo, las Salas citarán a una audiencia a la que comparecerá, además de las partes, los peritos y testigos en caso de haberse ofrecido las pruebas pericial o testimonial;

VI. En la audiencia a que se refiere la fracción anterior se rendirán las declaraciones y dictámenes respectivos y se dictará resolución;

VII. La Sala tendrá la más amplia libertad para la apreciación de las pruebas en el incidente de impugnación, basándose en los principios generales del derecho, la lógica y la experiencia, y

VIII. Si se declara la falsedad o falta de autenticidad del documento impugnado, éste se tendrá por no ofrecido para todos los efectos legales correspondientes.

La resolución que se dicte en el incidente de impugnación no admite recurso alguno.

²⁹ **ARTICULO 437.-** Documentos públicos. Son documentos públicos los autorizados por funcionarios públicos o depositarios de la fe pública, dentro de los límites de su competencia, y con las solemnidades o formalidades prescritas por la Ley. Tendrán este carácter tanto los originales como sus copias auténticas firmadas y autorizadas por funcionarios que tengan derecho a certificar.

³⁰ **Artículo 7.** Los juicios que se promuevan ante el Tribunal se sustanciarán y resolverán con arreglo a los procedimientos que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos; en materia fiscal, además a la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, el Código Fiscal del Estado de Morelos, la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y la ley o decreto que crea un organismo descentralizado cuyos actos se impugnen; en materia de responsabilidad de los servidores públicos a la ley estatal en la materia, en lo que resulten aplicables.

³¹ Fojas 04 a la 06

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. ³²

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.” (Sic)

En los que esencialmente señala que, el pago de su pensión a razón de cuarenta salarios mínimos vigentes en la entidad, es plenamente procedente porque así fue concedido en su Decreto Pensionatorio, lo que no se ha cumplido porque como se comprueba con los recibos a su nombre, recibe una cantidad mucho menor de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], por que en el año **dos mil veinticinco** el salario mínimo es de [REDACTED] [REDACTED] por

³² SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. JURISPRUDENCIA de la Novena Época. Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, Abril de 1998. Tesis: VI.2o. J/129. Página: 599.

lo que debería recibir el monto de [REDACTED]
[REDACTED]

Señala que en los años dos mil veinticuatro y dos mil veinticinco se ha incumplido con el artículo segundo de su Decreto pensionatorio, que ordenó se le cubriera su pensión a razón de lo equivalente a cuarenta salarios mínimos y como se acredita con los recibos respectivos de dichos años, se le ha pagado un monto menor a lo legalmente establecido, razón por lo cual esta autoridad deberá ordenar el pago retroactivo del faltante de pensión y aguinaldo dos mil veinticuatro, más lo que se sigan generando hasta el cumplimiento a la sentencia que se dicte.

7.5 Contestación de la demanda.

Por su parte, las **autoridades demandadas**, sostuvieron a groso modo que, se ha dado cumplimiento al Decreto Pensionatorio expedido a favor de la actora, remitiéndose a los comprobantes de pago de marzo de dos mil veinticuatro a agosto de dos mil veinticinco y aguinaldo; siendo que de conformidad al artículo 66 de la **LSERCIVILEM**, establece que la cuantía de la pensión de incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos. Por ello y en base a la resolución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos emitida el tres de diciembre de dos mil veinticuatro, publicada el diecinueve de ese mismo mes y año, se aplicó el aumento por fijación del 6.5%, mismo que correspondería al año dos mil veinticinco.

De lo cual concluyó que, se le estaba pagando debidamente su pensión al actor, ya que no era procedente la actualización de los cuarenta salarios mínimos concedidos. De lo contrario generaría una afectación patrimonial a la hacienda pública, violentando los principios legalidad, honradez y eficacia.

Por último, la Dirección General de Recursos Humanos opuso la prescripción en términos del artículo 104 de la **LSERCIVILEM**, respecto a las generadas con anterioridad a un año de la presentación de la demanda, la cual se presentó el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] es decir se encuentra prescritas desde el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] hacia atrás.

7.6 Análisis de la contienda.

Este órgano jurisdiccional, conforme al artículo 109 Bis, de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos*, así como el artículo 3, de la **LJUSTICIAADMVAEMO**, está dotado de plena jurisdicción, es un órgano de control de la legalidad con potestad de anulación y está dotado de plena autonomía para dictar sus fallos en armonía con las disposiciones legales que sean aplicables al caso concreto.

Por este motivo, las omisiones imputadas se analizarán conforme al ordenamiento legal que resulte aplicable.

En ese sentido, y como ha quedado señalado en párrafos precedentes, el accionante reclama de la **autoridad demandada** lo siguiente:

[illegible]

A efecto de dilucidar lo anterior, conviene recordar que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que solo pueden omitirse conductas fácticas y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho, no acata la facultad normativa, siendo aplicable a lo anterior, la siguiente tesis aislada:

ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVEN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO.

Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo

[illegible]

ARTÍCULO 1º. – Se concede pensión por [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] a [REDACTED] [REDACTED], quien ha prestado sus servicios en el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: [REDACTED] adscrito en la Dirección General de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

³³ Registro digital: 196080 Instancia: Primera Sala Novena Época Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 1a. XXIV/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, página 53 Tipo: Aislada.

del Presupuesto otorgado a dicho Instituto en el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2023, en términos de lo señalado en el artículo décimo sexto del Decreto número Quinientos Setenta y Nueve, cumpliendo con lo que disponen los artículos 14 y 17, penúltimo párrafo de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

ARTÍCULO 3º. – La pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, atento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos de aplicación supletoria en términos de lo señalado por el numeral Segundo Primero Transitorio de la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, integrándose por el salario, las prestaciones, las asignaciones y la compensación de fin de año o aguinaldo, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley antes citada.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad."

SEGUNDO. – Notifíquese personalmente al quejoso la presente determinación y notifíquese por Oficio al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada dentro del expediente número: [REDACTED]; ambas notificaciones por conducto de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado de Morelos.

TERCERO. – El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.

Poder Legislativo del Estado de Morelos, Sesión Ordinaria de Pleno iniciada el seis de diciembre del dos mil veintitrés.

De la transcripción efectuada, se advierte que en el [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], se fijó la forma y términos en que debe cubrirse la pensión concedida en favor del accionante; en ese sentido, del decreto en cita, se advierte que el Poder Legislativo del Estado de Morelos, determinó que la pensión del actor, deberá cubrirse a razón del equivalente a [REDACTED] [REDACTED] a partir del día siguiente a aquél en que se separe de sus labores y que la misma será cubierta por la **Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos**, emanando de ello la

obligación de dicha autoridad de dar debido cumplimiento al mandato legislativo que nos ocupa.

Asimismo en términos del artículo 11 fracción IV, V, VII, XXIV y XXV³⁴ del *Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo Estatal*, se concluye que, a la Dirección General de Recursos Humanos le corresponden entre otras, las siguientes atribuciones específicas: proponer a la Persona Titular de la Secretaría **la política de administración de los recursos humanos** de la Administración Pública Centralizada, así como lineamientos y normativa inherente a la gestión del capital humano para su instrumentación, ejecución, seguimiento, control y evaluación;

³⁴ **Artículo 11.** A la persona Titular de la Dirección General de Recursos Humanos le corresponden las atribuciones específicas siguientes:

I. Proponer a la Persona Titular de la Secretaría la política de administración de los recursos humanos de la Administración Pública Centralizada, así como lineamientos y normativa inherente a la gestión del capital humano para su instrumentación, ejecución, seguimiento, control y evaluación;

IV. Administrar la plantilla de personal autorizada y el tabulador de sueldos de la Administración Pública Centralizada, conforme a la Normativa;

V. Desarrollar, instrumentar, ejecutar, controlar, verificar, supervisar y evaluar el sistema de pagos y prestaciones laborales de las personas servidoras públicas en activo, **de las percepciones de las personas jubiladas y pensionadas**, y de pagos de servicios personales y profesionales que así corresponda, efectuando el cálculo correspondiente, la comprobación de reintegros y las cantidades devengadas, como parte del mismo sistema; vigilando que se cumplan las obligaciones fiscales de seguridad social y cualquier otra aplicable, conforme a la Normativa y en coordinación con la Secretaría de Hacienda cuando así corresponda;

VII. Realizar la inclusión en las nóminas respectivas de las personas servidoras públicas en activo, personas jubiladas y pensionadas, en los términos de la Normativa;

XXIV. Coordinar e implementar las acciones necesarias para llevar a cabo la credencialización y la revisión de la supervivencia de las personas jubiladas y pensionadas;

XXV. Efectuar las acciones necesarias que competan, para que sea otorgada la seguridad social a las personas servidoras públicas en activo, personas pensionadas y jubiladas de la Administración Pública Centralizada, cuando el caso así lo requiera, así como gestionar los recursos financieros ante la Secretaría correspondiente; y

administrar la plantilla de personal autorizada y el tabulador de sueldos de la Administración Pública Centralizada, conforme a la Normativa; desarrollar, instrumentar, ejecutar, controlar, verificar, supervisar y evaluar el sistema de pagos y prestaciones laborales de las personas servidoras públicas en activo, **de las percepciones de las personas jubiladas y pensionadas**, y de pagos de servicios personales y profesionales que así corresponda, efectuando el cálculo correspondiente, la comprobación de reintegros y las cantidades devengadas, como parte del mismo sistema; vigilando que se cumplan las obligaciones fiscales de seguridad social y cualquier otra aplicable, conforme a la Normativa y en coordinación con la Secretaría de Hacienda cuando así corresponda; realizar la inclusión en las nóminas respectivas de las personas servidoras públicas en activo, personas **jubiladas y pensionadas**, en los términos de la Normativa; coordinar e implementar las acciones necesarias para llevar a cabo la credencialización y la revisión de la supervivencia de las personas jubiladas y pensionadas; efectuar las acciones necesarias que competan, para que sea otorgada la seguridad social a las personas servidoras públicas en activo, personas **pensionadas y jubiladas** de la Administración Pública Centralizada, cuando el caso así lo requiera, así como gestionar los recursos financieros ante la Secretaría correspondiente.

En las relatadas consideraciones, y por las facultades que ejercen la Dirección General de Recursos Humanos, es evidente que es a quien compete la responsabilidad de atender todo lo relacionado a las prestaciones que hayan sido pagadas

al pensionado o aquellas que estén pendientes de cubrirse, por ende, su calidad como autoridad responsable de esa función.

Por lo que existe un deber de las demandadas Director General de Recursos Humanos y de la Secretaría de Hacienda, el cual deriva de una facultad que la habilita y da competencia para participar y realizar en su caso los pagos a la **parte actora** del pago correcto de sus pensiones.

Así tenemos que el acto de omisión implica una falta de acción por parte de la **autoridad demandada**, quien tiene un deber derivado de una facultad. Así, la carga de la prueba recae sobre ella para demostrar que no han incurrido en los actos de omisión que les atribuye la **parte actora**.

Es así que, en la parte considerativa del Decreto en comento³⁵, se advierte que el Legislador, al momento de fijar el monto de la pensión del actor, tomó en consideración la Hoja de Certificación de Salario de fecha [REDACTED], expedida por el Director General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Morelos, en la que se hizo constar el sueldo nominal del actor por la cantidad de [REDACTED]

De igual manera y al haberse acreditado una antigüedad de servicio efectivo de [REDACTED];

³⁵ Foja 09 vuelta del proceso.

conforme al artículo 17 inciso f) de la **LSEGSOCSP**EM, determinó que le correspondía al actor una pensión equivalente al [REDACTED] de su último salario, advirtiéndole que dicha cantidad sería de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] que era inferior al equivalente de cuarenta veces el salario mínimo general vigente.

En ese sentido, determinó procedente otorgar al actor, una pensión por [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Haciendo hincapié de lo dispuesto por el artículo 17³⁶ de la **LSEGSOCSP**EM, que prevé que el monto de la pensión en ningún caso el monto podrá ser inferior al equivalente a cuarenta salarios mínimos vigentes en la entidad.

³⁶ **Artículo 17.- La pensión por Cesantía en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la ley que, habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, se separe voluntariamente de su función o quede separado de la misma, siempre que hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio.**

La pensión se calculará aplicando los porcentajes siguientes:

- a).- Por diez años de servicio 50%;
- b).- Por once años de servicio 55%;
- c).- Por doce años de servicio 60%;
- d).- Por trece años de servicio 65%;
- e).- Por catorce años de servicio 70%; y
- f).- Por quince años o más de servicio 75%.

Para disfrutar de esta prestación la antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. Y para efectos de computar la antigüedad, deberán considerarse los años de servicio en alguna otra área de la Administración Pública o de cualquiera de los Poderes del Estado o Municipios, aun cuando la relación haya sido de carácter burocrática, al amparo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el Salario Mínimo General Vigente en la Entidad.

En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el primer párrafo, del artículo 24 de esta Ley.

Del contenido del citado artículo, así como del [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] se advierte la obligación de
pago a cargo de las **autoridades demandadas**.

Ahora bien, si el Decreto Pensionatorio de mérito
transcrito con antelación, fue expedido el [REDACTED]
[REDACTED] y publicado el [REDACTED]
[REDACTED], como se comprueba con la siguiente prueba, previamente
valorada:

LA DOCUMENTAL. – Consistente en copia simple de
la portada y las páginas 43, 44 y 45 del periódico oficial
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

Pero, además el actor causó baja el [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] como se acreditó con la
siguiente prueba:

LA DOCUMENTAL. – Consistente en Constancia de
Servicios a nombre de [REDACTED] [REDACTED], suscrito
y firmado por la Directora General de Recursos
Humanos de la Secretaría de Administración, donde se
indica como fecha de baja el [REDACTED] [REDACTED]

³⁷ Fojas 8 y 9 del presente asunto.

[REDACTED] y como alta como pensionado el
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Se concluye legalmente que, para el cálculo del monto inicial del pago pensionatorio, debe tomarse en cuenta el salario mínimo que regía en el año **dos mil veinticuatro**, siendo el de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] que multiplicados por cuarenta dan un resultado de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

En ese orden de ideas, analizadas las siguientes pruebas, valoradas previamente:

12. LA DOCUMENTAL. – Consistente en copias certificadas constantes de veintiún fojas según su certificación, que corresponden a la información obtenida del sistema de nómina a nombre de [REDACTED] [REDACTED] de donde se desprenden los comprobantes de pagos pensionatorio:⁴⁰

A) De marzo a diciembre de dos mil veinticuatro, amparando cada uno de ellos la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

³⁸ Fojas 48

³⁹

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/873886/Tabla_de_Salarios_M_nimos_2024.pdf

⁴⁰ Fojas de la 51 a la 71.

B) Pago de aguinaldo del año dos mil veinticuatro como pensionado por un total de [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

C) De enero a agosto de dos mil veinticinco, amparando cada uno de ellos la cantidad de [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

Se comprueba con la descrita en el inciso A) que, en año dos mil veinticuatro, se le pagó a actor el pago mensual pensionatorio correctamente por la cantidad de [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

Respecto al aguinaldo de ese mismo año, corren agregadas las pruebas marcadas con el inciso B), que respaldan el pago de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Ahora, el aguinaldo debe cubrirse en términos del artículo 42 primer párrafo⁴¹ de la LSERCIVILEM.

⁴¹ **Artículo *42.-** Los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado o de los Municipios, tendrán derecho a un aguinaldo anual de 90 días de salario. El aguinaldo estará comprendido en el presupuesto anual de egresos y se pagará en dos partes iguales, la primera a más tardar el 15 de diciembre y la segunda a más tardar el 15 de enero del año siguiente. Aquéllos que hubieren laborado una parte del año, tendrán derecho a recibir la parte proporcional de acuerdo con el tiempo laborado.

dicha prestación, ya que se le pago en exceso [REDACTED]

Ahora bien, respecto al pago pensionatorio mensual del año dos mil veinticinco, la defensa de las demandadas es ineficaz; para ello resulta conducente traer a la vista el artículo 17 de la **LSEGSOCSP**, que incluso sirvió de sustento en el Decreto Pensionatorio emitido a favor del accionante, mismo que a la letra dispone:

Artículo 17.- La pensión por Cesantía en Edad Avanzada se otorgará al sujeto de la ley que, habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años de edad, se separe voluntariamente de su función o quede separado de la misma, siempre que hubiere prestado por lo menos 10 años de servicio.

La pensión se calculará aplicando los porcentajes siguientes:

- a).- Por diez años de servicio 50%;
- b).- Por once años de servicio 55%;
- c).- Por doce años de servicio 60%;
- d).- Por trece años de servicio 65%;
- e).- Por catorce años de servicio 70%; y
- f).- Por quince años o más de servicio 75%.

Para disfrutar de esta prestación la antigüedad puede ser interrumpida o ininterrumpida. Y para efectos de computar la antigüedad, deberán considerarse los años de servicio en alguna otra área de la Administración Pública o de cualquiera de los Poderes del Estado o Municipios, aun cuando la relación haya sido de carácter burocrática, al amparo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el Salario Mínimo General Vigente en la Entidad.

En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto por el primer párrafo, del artículo 24 de esta Ley.

Texto legal del cual se advierte que, el legislador morelense determinó que, **el monto de la pensión mensual a que se refiere ese artículo, en ningún caso podrá ser**

inferior al equivalente de 40 veces el Salario Mínimo General Vigente en la Entidad.

Sin que se pueda perder de vista que dicho mandato proviene de una ley de carácter general, que tiene como fin primordial en términos del artículo 1⁴² de la **LSEGSOCSP**EM, normar las prestaciones de seguridad social que corresponden a los miembros de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia, los cuales están sujetos a una relación administrativa, con el fin de garantizarles el derecho a la salud, la asistencia médica, los servicios sociales, así como del otorgamiento de pensiones, previo cumplimiento de los requisitos legales.

En esa tesitura y por lógica legal, cualquier autoridad implicada en el pago y cumplimiento de las prestaciones tuteladas por esa regulación, está conminada a su cumplimiento. En el caso específico al acato del artículo 17 de la **LSEGSOCSP**EM, de que las pensiones concedidas a los elementos policiales **en ningún caso sean inferiores al equivalente de 40 veces el Salario Mínimo General Vigente en la Entidad;** es entonces que, aún y con el transcurso del tiempo deberán cumplir con esa disposición; por ello conforme se incremente el salario mínimo de esta entidad morelense,

⁴² **Artículo 1.-** La presente Ley tiene por objeto normar las prestaciones de seguridad social que corresponden a los miembros de las Instituciones Policiales y de Procuración De Justicia detallados en el artículo 2 de esta Ley, los cuales están sujetos a una relación administrativa, con el fin de garantizarles el derecho a la salud, la asistencia médica, los servicios sociales, así como del otorgamiento de pensiones, previo cumplimiento de los requisitos legales.

Así mismo, esta Ley se ocupa de la determinación de los derechos que asisten a los beneficiarios de los sujetos de la Ley y detalla los requisitos para hacerlos efectivos.

deberá actualizarse el monto pensionatorio a los cuarenta salarios mínimos vigentes.

En el entendido que, el beneficio consistente en que, el monto de la pensión en ningún caso será inferior al equivalente de 40 veces el Salario Mínimo General Vigente en la Entidad, tiene como base normas internacionales como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establecen el derecho de toda persona pensionada a disfrutar de una seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa, incluido por lógica el aspecto económico.

En efecto, el precepto legal de referencia establece de manera expresa que la pensión motivo de análisis, nunca podrá ser inferior a razón del equivalente de cuarenta veces el salario mínimo general vigente, lo que evidencia que el legislador fijó un mecanismo de cuantificación cerrado, el cual define de manera integral el monto de la pensión, sin contemplar el otorgamiento adicional de prestaciones específicas de manera independiente.

Por su parte, si bien el Decreto refiere que el monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido, integrándose por salario, prestaciones y asignaciones, dicha disposición debe interpretarse de forma sistemática con el artículo anterior; en el sentido de que la integración constituye un parámetro para determinar la cuantía final, más no implica el reconocimiento autónomo de cada uno de los conceptos que conformaban el ingreso del prestador de servicios en activo, que deben adicionarse cuando ya se disfruta del beneficio antes señalado.

Por otra parte, si bien el Decreto motivo de la presente señaló que, la pensión concedida deberá incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, lo que se encuentra en contraposición con el aumento a cuarenta salarios mínimos vigentes; lo procedente es la aplicación del mayor beneficio para el actor; que es, se actualice a cuarenta salarios mínimos el monto pensionatorio.

Por lo razonado y respecto al año dos mil veinticinco, la pensión del actor deberá actualizarse a cuarenta salarios mínimos; siendo que, en esa anualidad el salario mínimo se determinó en [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] que multiplicados por cuarenta resultan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Del acervo probatorio antes descrito, en particular en inciso el **C)**, se lee:

C) De enero a agosto de dos mil veinticinco,
amparando cada uno de ellos la cantidad de [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

Se aprecia que el pago pensionatorio al mes de agosto de dos mil veinticinco, se cubrió por el monto de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] que sumados ascienden a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] siendo que por esa temporalidad con la pensión de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] mensuales que es la correcta, debieron cubrirse [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] de ahí que, haciendo la sustracción correspondiente de enero a agosto de dos mil veinticinco se le adeudan a la actora [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Sin que en autos conste la cantidad cubierta de septiembre a diciembre de dos mil veinticinco ni el pago de aguinaldo de ese año; por ende, se procede a su cálculo, quedando sujeto a que se acredite en el procedimiento de ejecución de sentencia su debido pago o se cubra la diferencia.

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

cuales pretende se actualice dicha figura jurídica, sean pagos pensionatorios o aguinaldos, limitándose a señalarla de forma global.

Lo anterior de conformidad con el siguiente criterio jurisprudencial:

MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. REQUISITOS PARA ESTIMAR QUE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN RESPECTO DE LAS PRESTACIONES PERIÓDICAS DERIVADAS DE SU RELACIÓN ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO DE GUANAJUATO, SE OPUSO ADECUADAMENTE.⁴⁴

La excepción de prescripción de una obligación de pago no opera de manera oficiosa, sino rogada, por lo que compete al demandado hacerla valer. Esta última característica se acentúa aún más en la materia contenciosa administrativa, donde impera el principio de estricto derecho; aspecto que, de acuerdo con el artículo 280, fracción III, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, obliga a la autoridad a formular su contestación, plasmando claramente las excepciones y defensas que estime pertinentes, a riesgo de que, en caso contrario, esto es, ante su vaguedad o imprecisión, no sean analizadas. Por tanto, para estimar que la excepción de prescripción se opuso adecuadamente, respecto de las prestaciones periódicas derivadas de la relación administrativa entre los miembros de las instituciones de seguridad pública y dicha entidad federativa, es necesario cumplir con los requisitos que permitan realizar el estudio correspondiente; esto es, la autoridad demandada debe precisar, en términos generales, la acción o pretensión respecto de la cual se opone, el momento en que nació el derecho de la contraparte para hacerla valer, la temporalidad que tuvo para disfrutarla, la fecha en que prescribió esa prerrogativa, así como el fundamento legal o reglamentario o, en su defecto, la circular, disposición administrativa o acuerdo del Ayuntamiento en que se contenga; elementos que, indudablemente, tenderán a demostrar que se ha extinguido el derecho del actor para exigir el pago de dichas prestaciones.

Que señala que, para que dicha excepción pueda ser analizada, es necesario que la autoridad demandada precise:

⁴⁴ Época: Décima Época; Registro: 2014038; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV; Materia(s): Administrativa; Tesis: XVI.1o.A. J/34 (10a.) Página: 2486.

a) la prestación o prestaciones respecto de las cuales la opone; b) el momento en que nació el derecho del actor para exigir las; c) el plazo con que contaba para hacerlo valer; d) la fecha en que prescribió; y e) el fundamento legal aplicable.

Sin embargo, en el caso concreto, la demandada no desglosa prestación por prestación, ni establece con claridad los elementos antes señalados respecto de cada una de ellas, lo que impide a este órgano jurisdiccional realizar el estudio correspondiente, pues no es jurídicamente válido suplir la deficiencia en la formulación de sus excepciones.

En consecuencia, al no haberse opuesto la excepción de prescripción en forma clara y precisa respecto de cada una de las prestaciones reclamadas, la misma deviene inoperante, sin que resulte procedente su análisis de fondo.

Por último y considerando el año del dos mil veintiséis en que el presente asunto se resuelve, se determina que la pensión del justiciable mensual deberá ser de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] tomando en cuenta que el salario mínimo en el año mencionado es de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] y que al mes de mayo hace un total de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] por ello las demandadas deberán en ejecución de sentencia demostrar que hasta esa fecha se le está pagando ese monto mensualmente o cubrir la diferencia; debiendo

seguir cubriendo el resto de sus pensiones y aguinaldo con la dinámica descrita.

En razón de lo anterior, considerando que la omisión demandada consistió en:

"... La omisión de no pagarme mi pensión por Cesantía de edad Avanzada a razón de 40 días de salario mínimo vigente, tal como los establece el ARTÍCULO SEGUNDO del

[REDACTED]

Se declara su **ilegalidad parcialmente**, porque como quedó probado en el año dos mil veinticuatro no existe adeudo a favor del justiciable; no así tocante al año dos mil veinticinco, declarándose su nulidad solo respecto a este último, en términos del artículo 4 fracción II de la **LJUSTICIAADMVAEMO**, que prevé:

Artículo 4. Serán causas de nulidad de los actos impugnados:

Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso;

7.7 Pretensiones

El actor hizo valer las siguientes:

Se ordene a las autoridades demandadas a pagarle su pensión a razón de la cantidad de cuarenta salarios mínimos.

Se condene a las autoridades demandadas a pagarle el faltante de mi pensión de los años dos mil veinticuatro y dos mil veinticinco, así como el aguinaldo del dos mil veinticuatro.

Mismas que, con sus modalidades han quedado satisfechas, salvo las condenas solicitadas tocante al año dos mil veinticuatro, que se determinó no existen adeudos a su favor.

Ahora bien, como se aprecia en el presente juicio, fueron demandadas las que fueran la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, mismas que de conformidad con el artículo 9 fracción III de la *Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos*⁴⁶, fue reformada mediante Decreto número seiscientos cinco, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", de fecha tres de octubre del dos mil veinticinco, número 6475, extraordinaria, 6ª época y que entró en vigor ese mismo día, cambiando la denominación de la Secretaría de Hacienda, para ser la **Secretaría de**

⁴⁶ Artículo 9. La Persona Titular del Poder Ejecutivo Estatal se auxiliará, en el ejercicio de sus atribuciones, de las siguientes Secretarías y Dependencias:

...
III. La Secretaría de Administración y Finanzas;
...

Administración y Finanzas, con las funciones y atribuciones que la primera de las señaladas venía ejerciendo; por tanto en términos de la disposición transitoria cuarta⁴⁷ de dicho Decreto, las adscripciones de las unidades administrativas que eran de la antes Secretaría de Administración, se entenderán hechas a la **Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos**, como lo es la Dirección General de Recursos Humanos.

8. EFECTOS DEL FALLO

8.1 Son **infundadas** por un lado y **fundadas** por otro las razones de impugnación hechas valer por la actora.

8.2 Se declara parcialmente **existente la omisión consistente en:**

“... La omisión de no pagarme mi pensión por Cesantía de edad Avanzada a razón de 40 días de salario mínimo vigente, tal como los establece el ARTÍCULO SEGUNDO del

[REDACTED]

Por ende, se determina **ilegal** y su **nulidad** solamente respecto a los pagos pensionatorios del año dos mil veinticinco.

⁴⁷ **CUARTA.** Las referencias que se hagan y las atribuciones que se otorgan en otras leyes, códigos, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas, así como en contratos o convenios a la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Estatal o a unidades administrativas de su adscripción, se entenderán hechas o conferidas a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal o a las unidades administrativas de su adscripción que resulten competentes conforme al Reglamento Interior que se expida para tal efecto.

8.3 Se condena a las autoridades demandadas Director General de Recursos Humanos y Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado al pago de diferencias de las pensiones de enero a agosto de dos mil veinticinco por la cantidad de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

8.4 Las demandadas deberán en ejecución de sentencia demostrar los siguientes pagos o cubrir las diferencias:

8.4.1 De los meses de septiembre a diciembre de dos mil veinticinco el monto de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

8.4.2 Aguinaldo del año dos mil veinticinco a razón de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

8.4.3 De enero a mayo de dos mil veintiséis el pago de un total de [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

8.4.4 Las pensiones mensuales de junio a diciembre del año del dos mil veintiséis se deberán pagar por la cantidad [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

8.6. Se condena a las **autoridades demandadas** a seguir cubriendo el resto de sus pensiones y aguinaldos con la dinámica descrita en el presente fallo.

8.8 Cumplimiento

Se concede a las autoridades responsables **Director General de Recursos Humanos y Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos**, un término de **diez días hábiles** para que dé cumplimiento voluntario a lo ordenado en el presente fallo, una vez que cause ejecutoria; apercibido que, de no hacerlo así, se procederá a la ejecución forzosa en términos de lo dispuesto por los artículos 90⁴⁸ y 91⁴⁹ de la **LJUSTICIAADVMAEMO**.

Al cumplimiento de esta sentencia están obligadas las autoridades, que aún y cuando no han sido demandadas en el

⁴⁸ **Artículo 90.** Una vez notificada la sentencia, la autoridad demandada deberá darle cumplimiento en la forma y términos previstos en la propia resolución, haciéndolo saber a la Sala correspondiente dentro de un término no mayor de diez días. Si dentro de dicho plazo la autoridad no cumpliera con la sentencia, la Sala, le requerirá para que dentro del término de veinticuatro horas cumplimente el fallo, apercibida que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una de las medidas de apremio prevista en esta ley.

⁴⁹ **Artículo 91.** Si a pesar del requerimiento y la aplicación de las medidas de apremio la autoridad se niega a cumplir la sentencia del Tribunal y no existe justificación legal para ello, el Magistrado instructor declarará que el servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. En todo caso, la Sala procederá en la forma siguiente:

I. Si la ejecución consiste en la realización de un acto material, la Sala podrá realizarlo, en rebeldía de la demandada;

II. Si el acto sólo pudiere ser ejecutado por la autoridad demandada y esta tuviere superior jerárquico, la Sala requerirá a su superior para que ordene la complementación de la resolución; apercibido que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrán las medidas de apremio previstas en esta ley;

III. Si a pesar de los requerimientos al superior jerárquico, no se lograre el cumplimiento de la sentencia, y las medidas de apremio no resultaren eficaces, se procederá en los términos del párrafo primero de este artículo, y

IV. Para el debido cumplimiento de las sentencias, el Tribunal podrá hacer uso de la fuerza pública.

Ningún expediente podrá ser archivado sin que se haya debidamente cumplimentado la sentencia y publicado la versión pública en la Página de Internet del Tribunal.

presente juicio, por sus funciones deban intervenir en el cumplimiento de esta sentencia.

En aval de lo afirmado, se invoca la siguiente tesis de jurisprudencia, de rubro y texto siguientes:

AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.⁵⁰

Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.

La condena de las prestaciones que resultaron procedentes, se hace con la salvedad de que se tendrán por satisfechas, aquellas que dentro de la etapa de ejecución la autoridad demanda acredite con pruebas documentales fehacientes que en su momento fueron pagadas al actor.

Lo anterior, con la finalidad de respetar los principios de congruencia y buena fe guardada que debe imperar entre las partes, pues si la demandada aporta elementos que demuestren su cobertura anterior a las reclamaciones de la **parte actora**, debe tenerse por satisfecha la condena impuesta, pues de lo contrario se propiciaría un doble pago, lo que está prohibido por la ley.

Ello guarda congruencia con lo establecido en el artículo 715 del **CPROCIVILEM** de aplicación complementaria a la

⁵⁰ Época: Novena Época; Registro: 172605; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: **Jurisprudencia**; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Mayo de 2007; Materia(s): Común; Tesis: 1a./J. 57/2007; Página: 144.

LJUSTICIAADVMAEMO, el cual en la parte que interesa establece:

ARTICULO 715.- Oposición contra la ejecución forzosa. Contra la ejecución de la sentencia y convenio judicial no se admitirá más defensa que la de pago...

El pago de las prestaciones a que fueron condenadas las demandadas, se deberá enterar la cantidad antes señalada por medio de transferencia a la Cuenta de Cheques BBVA Bancomer: [REDACTED] Clabe interbancaria BBVA Bancomer: [REDACTED] a nombre del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, RFC: [REDACTED] señalándose como concepto el número de expediente TJA/5ªSERA/183/2025; comprobante que deberá remitirse al correo electrónico oficial: fondoauxiliar.depositos@tjamorelos.gob.mx, y exhibirse ante la Sala del conocimiento de este Tribunal, con fundamento en lo establecido en el artículo 88 apartado B⁵¹ del *Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos*. Debiendo la parte actora exhibir su constancia de situación fiscal.

Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en lo dispuesto en los artículos 109 bis de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos*; los artículos 1, 18

⁵¹ **Artículo 88.** Además de los considerados en el artículo 44 de la Ley Orgánica, son recursos del Fondo Auxiliar los siguientes:

B. Recursos ajenos, constituidos por depósitos en efectivo, transferencia electrónica, depósito bancario o en valores, que por cualquier causa y mediante la exhibición del certificado de depósito correspondiente se realicen o se hayan realizado ante las Salas.

inciso B fracción II sub inciso a) y demás relativos y aplicables de la **LORGTJAEMO** 1, 3, 85 y 86 de la **LJUSTICIAADMVAEM**, es de resolverse, al tenor siguiente.

9. PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Este **Tribunal** es competente para conocer y fallar el presente asunto, en los términos precisados en capítulo cuatro de la presente resolución.

SEGUNDO. Son **infundados**, por un lado, pero fundados por otro los argumentos hechos valer por la **parte actora**.

TERCERO. Es existente la omisión vinculada al pago de cuando menos cuarenta salarios mínimos mensuales, respecto al año dos mil veinticinco, pero inexistente tocante al año dos mil veinticuatro.

CUARTO. Se declara la **ilegal** la **omisión** de las autoridades demandadas **Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Director General de Recursos Humanos**, de efectuar el pago pensionatorio del año dos mil veinticinco, por ende, **se declara su nulidad**.

QUINTO. Se condena a las autoridades **Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y Director General de Recursos Humanos**, al pago de la cantidad establecida en el apartado 8.3.

SEXTO. Las demandadas **Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y**

Director General de Recursos Humanos, deberán en ejecución de sentencia demostrar pagos o cubrir las diferencias, en términos del apartado **8.4**.

SÉPTIMO. Las demandadas quedan conminadas al cumplimiento de los apartados **8.6**.

OCTAVO. Cumplimiento que deberá realizar la autoridad demandada en el plazo establecido en el apartado **8.8**.

NOVENO. En su oportunidad archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

10.- NOTIFICACIONES

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, como legalmente corresponda.

11. FIRMAS

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron los integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Magistrado Presidente **GUILLERMO ARROYO CRUZ**, Titular de la Segunda Sala de Instrucción; Magistrada **MONICA BOGGIO TOMASAZ MERINO**, Titular de la Primera Sala de Instrucción; Magistrada **VANESSA GLORIA CARMONA VIVEROS**, Titular de la Tercera Sala de Instrucción; Magistrado **MANUEL GARCÍA QUINTANAR**, Titular de la Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas; Magistrado **JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO**, Titular de la Quinta Sala Especializada en

"2026, Año de Margarita Maza Parada".

Responsabilidades Administrativas y ponente en el presente asunto; Magistrada **KARLA SOCORRO REYES REYES**, Titular de la Sexta Sala de Instrucción y Magistrada **CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR**, Titular de la Séptima Sala de Instrucción; en términos de la Disposición Transitoria Cuarta del decreto número 3448 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la *Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos* y de la *Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos*, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5629 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho; ante **ANABEL SALGADO CAPISTRÁN**, Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE MORELOS EN PLENO.**

MAGISTRADO PRESIDENTE



GUILLERMO ARROYO CRUZ

TITULAR DE LA SEGUNDA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADA



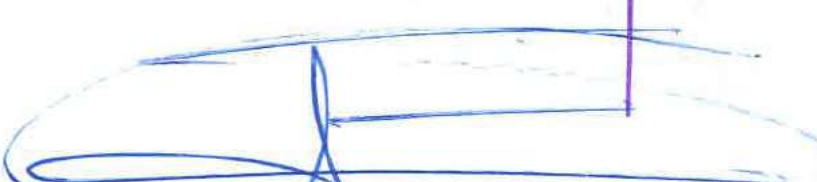
MONICA BOGGIO TOMASAZ MERINO

TITULAR DE LA PRIMERA SALA DE INSTRUCCIÓN


MAGISTRADA

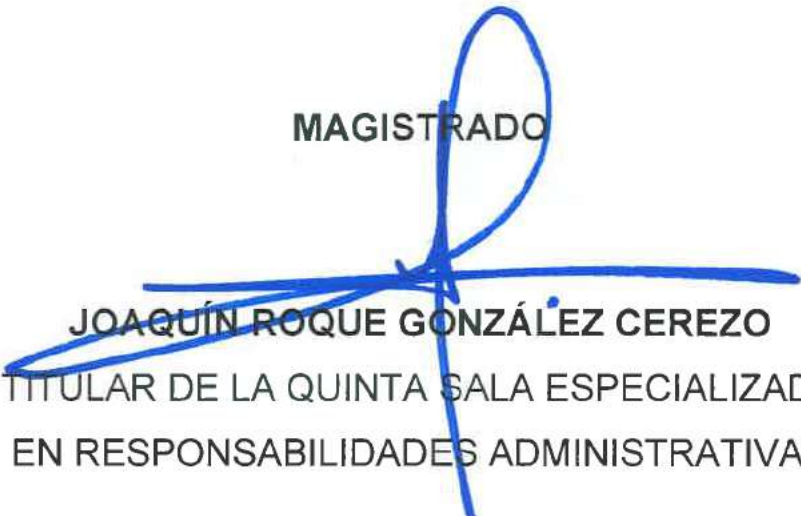
VANESSA GLORIA CARMONA VIVEROS
TITULAR DE LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADO



MANUEL GARCÍA QUINTANAR
TITULAR DE LA CUARTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

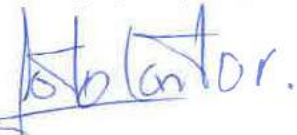
MAGISTRADO


JOAQUÍN ROQUE GONZÁLEZ CEREZO
TITULAR DE LA QUINTA SALA ESPECIALIZADA
EN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

MAGISTRADA


KARLA SOCORRO REYES REYES
TITULAR DE LA SEXTA SALA DE INSTRUCCIÓN

MAGISTRADA



CLARA ELIZABETH SOTO CASTOR

TITULAR DE LA SÉPTIMA SALA DE INSTRUCCIÓN

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS



ANABEL SALGADO CAPISTRÁN

ANABEL SALGADO CAPISTRÁN, Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, CERTIFICA: que estas firmas corresponden a la resolución emitida por este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente número **TJA/5ªSERA/183/2025**, promovido por [REDACTED] en contra de la **SECRETARÍA DE HACIENDA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS Y OTRA**; misma que es aprobada en Pleno de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiséis. **CONSTE.**

AMRC



“En términos de lo previsto en los artículos 3 fracciones IX y X y 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3 fracción XXI, 68 fracción VI, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 3 fracciones XXV y XXVII, 49 fracción VI, 84, y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos”.

